

### Agricultura

#### Opinión

### Hará falta más cereal

César Lumbreras

**T**odo apunta a que será necesario aumentar la producción de trigo y de cereales secundarios para hacer frente a la situación que vivimos, que se caracteriza por existencias limitadas, distorsiones en el mercado como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y recortes de las cosechas

debido a la sequía en España y también en otros estados miembros de la UE, como Francia, Alemania o Bélgica, por citar algunos. Conviene tener muy en cuenta la petición que ha planteado en Bruselas el ministro de Agricultura de Alemania. Ha solicitado a la Comisión Europea que se suspenda la aplicación de la rotación de cultivos en 2023 con el fin de poner más tierras en producción. Esta solicitud es muy importante por varias razones. La primera,

porque la plantea Alemania, que es una de las potencias de la UE; la segunda, porque el ministro germano pertenece al partido de los verdes; y, la tercera, porque esa rotación de cultivos es una de las medidas estrella de la nueva PAC, que debería entrar en vigor a partir del próximo año. Pero, estamos ante circunstancias excepcionales y será necesario adoptar medidas de carácter excepcional también.

Puede parecer que todavía falta mucho tiempo para 2023, pero la realidad es que los agricultores cerealistas comenzarán a tomar sus decisiones de siembra a finales de verano y, por lo tanto, quedan poco más de tres meses para que conozcan todas las reglas del juego que deberán respetar. Pa-

rece lógico atender a esta petición del ministro alemán, que es apoyada por otras delegaciones. Los precios de los cereales están disparados en el mercado mundial y es necesario movilizar todo el potencial productivo. En España, el trigo para pienso, que es el más barato de todas las categorías de este cereal, superó la semana pasada los 400 euros por tonelada en la Lonja de Barcelona, una cifra impensable a principios de este año. Los trigos panificables y los duros están muy por encima de esas cifras y, en algunos casos, hay dificultades de abastecimiento. Es necesario utilizar métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, pero también hace falta garantizar el abastecimiento.

#### Aceite

### La ayuda al olivar tradicional rondará los 50 euros hectárea

► Se busca evitar el abandono de los campos en dificultades y cuyo mantenimiento es crucial para las poblaciones y el entorno

C. Lumbreras. MADRID

La ayuda acoplada al olivar tradicional será aproximadamente de 50 euros por hectárea, de acuerdo con el proyecto que han preparado en el Ministerio de Agricultura. Esta medida contará con una dotación presupuestaria anual de 27,59 millones de euros, salvo que se introduzcan cambios de última hora y se ha calculado que se podrán acoger a la misma unas 580.000 hectáreas en toda España. Luis Planas anunció esta ayuda hace unas semanas al comienzo de la precampaña electoral en Andalucía, región que será una de las más beneficiadas, pero hasta el momento no se han concretado de manera oficial los detalles de la misma, que, según ese proyecto, se denominará «ayuda asociada al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental». Los beneficiarios deberán cumplir con una serie de requisitos relacionados con la edad de la plantación de olivos o la densidad de los árboles en cada parcela.

Según el citado proyecto, podrán solicitar la citada ayuda los agricultores activos que sean titu-

lares de explotaciones de olivar de secano declaradas en la PAC en alguno de estos años: 2018, 2019 o 2020. Los olivos deberán llevar plantados más de 10 años y contar con una densidad de plantación por hectárea de hasta 80 árboles o bien tener una pendiente media superior o igual al 25%. La ayuda se concederá en forma de pago anual por hectárea, que será más elevado en el caso de Baleares. Se busca evitar el abandono del olivar con dificultades relacionadas con limitaciones del medio natural, de alto valor ambiental y cuyo mantenimiento es esencial desde el punto de vista social y ecológico. Conviene recordar que inicialmente se había previsto una intervención sectorial para el olivar tradicional, que se habría otorgado a las organizaciones de productores en lugar de a los oliveros.

Por otro lado, el consumo de aceite de oliva ha mejorado en España en relación con la campaña anterior. En los siete primeros meses de la actual (desde octubre hasta abril) se han comercializado 367.000 toneladas, lo que supone el 4,2% más que en el mismo periodo de la campaña anterior. Por el contrario, las exportaciones han



La ayuda al olivar tradicional contará con 27,59 millones de euros

**Los olivos deberán llevar plantados más de 10 años y estar declarados en la PAC entre 2018 y 2020**

bajado cerca del 15% y se situaron hasta finales de abril en 573.000 toneladas. No obstante, las previsiones que se manejan en el departamento dirigido por Planas indican que se superará el millón de toneladas. En lo que respecta a la producción se habían obtenido 1,48 millones de toneladas hasta finales del mes pasado, cifra que puede considerarse como definitiva, a falta de alguna cantidad residual molturada en mayo. Hace un mes las existencias superaban el millón de toneladas.

### La caza da trabajo a 45.000 personas en Andalucía, según la Junta

S. D. C. MADRID

La caza da trabajo a más de 45.000 personas de forma directa e indirecta y genera 71 millones de euros de beneficios directos en Andalucía, según indicó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha tildado de «vital» la actividad cinegética. La consejera resaltó el pasado fin de semana que en Andalucía hay 256.000 cazadores, de los cuales más de 100.000 están federados en su intervención en la clausura de la asamblea general de la Federación Andaluza de Caza (FAC) en Archidona.

Crespo remarcó que la caza sostenible «es vital para el futuro del mundo rural de Andalucía e imprescindible para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad» de una comunidad «donde más del 30% de su territorio está protegido» por su alto valor medioambiental. Asimismo, aprovechó para destacar que «la caza sostenible es capital para fijar la población en los municipios rurales de Andalucía, donde vive el 66% de la población», y subrayó el trabajo conjunto «entre su departamento y la FAC con el objetivo de respaldar una actividad cinegética sostenible».



## Compromiso frente al lobo y contra el «abandono» de Sánchez

► Suárez-Quñones traslada a las organizaciones agrarias una batería de medidas para reducir el impacto de los ataques de este animal a las explotaciones ganaderas



El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quñones, se reúne con las organizaciones agrarias

David Viejo. WALLADOLID

**L**a prohibición de cazar al lobo también al norte del río Duero, después de que el Gobierno de España haya decidido incluir a este animal en el listado de especies protegidas (Lepre), sigue provocando mucho daño en los ganaderos de Castilla y León, que ven con preocupación su futuro y temen tener que dejar su modo de vida agrario ante las pérdidas que están sufriendo.

Y máxime cuando tras una nueva intentona la semana pasada, PSOE y Unidas Podemos tumbaban la proposición de Ley del PP en el Congreso de los Diputados que defendió la diputada por Palencia y exconsejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, de intentar revertir la situación.

El campo considera que Pedro Sánchez les ha vuelto a abandonar a su suerte y los líderes de las organizaciones profesionales agrarias han trasladado a la Junta su inquietud ante un grave problema que parece que tardará en resolverse, y han pedido que se agilicen los pagos de las indemnizaciones previstas por los ataques de lobo.

Lo han hecho durante un encuentro que han mantenido con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quñones, al que han reclamado también medidas para reducir la incidencia de enfermedades que afectan al ganado como a la fauna silvestre, como es el caso de la tuberculosis, que ha aumentado en los últimos tiempos. Además, han aprovechado la reunión para plantear al consejero su preocupación por el uso de las tierras de cultivo y en especial de regadío para la implantación de instalaciones de energías renovables.

Suárez-Quñones, por su parte, se ha comprometido con las organizaciones agrarias a seguir peleando en todas las instancias posibles que permita la ley para

conseguir que el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera suspenda la Orden de inclusión del lobo en el Lepre, y anunciaba una batería de medidas con el objetivo de reducir los ataques de lobo y su impacto. Entre ellas, la elaboración de un protocolo para la realización de controles de lobo cuando no han funcionado las medidas preventivas así como lograr financiación necesaria para implantar nuevas medidas de prevención en las explotaciones ganaderas.

Igualmente, el consejero se comprometió a mantener breves encuentros más específicos sobre este tema y les avanzaba que la Junta va a actualizar este año los

baremos de las indemnizaciones por daños a las explotaciones ganaderas, por los daños de lobo y demás fauna silvestre. Y recordando a los líderes agrarios la posibilidad de aplicar en Castilla y León la Ley de Caza, ante emergencias cinegéticas para reducir localmente las poblaciones de especies de animales salvajes.

Al respecto, podrán quedar sin efecto las prohibiciones si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. También cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para especies catalogadas de la flora silvestre o para especies de fauna no cinegética. Para prevenir perjuicios a los cultivos, el ganado, los bosques, la fauna y la calidad de las aguas, y cuando sea necesario por investigación, educación, repoblación o reintroducción. También para procesos de cría en cautividad autorizados, prevenir accidentes viales o daños a instalaciones de interés público.

**El consejero se compromete a llevar a cabo reuniones periódicas con las gentes del campo**

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER.COM +34 904 278 21

## Las indemnizaciones por ataques de lobo se actualizarán este año

► Las OPAs mostraron su preocupación por la implantación de renovables en cultivos

ABC  
VALLADOLID

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio actualizará este año los baremos de las indemnizaciones por daños de lobo y demás fauna silvestre a las explotaciones ganaderas de Castilla y León. Se hará a través de una orden que se debatirá en las reuniones específicas que mantendrá el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quíñones, con las organizaciones profesionales agrarias. También se abordarán otras acciones para minimizar las pérdidas.

La Consejería lo anunció en el mismo comunicado con el que informó sobre la reunión mantenida por el consejero con dichas OPAs y en cuyo marco, Suárez-Quíñones comentó la posibilidad de incluir en la orden una herramienta para declarar emergencias cinegéticas en alguna comarca concreta, recoge Ical. En este sentido, entre las medidas persevera el objetivo de conseguir del Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión de la Orden de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre).



Reunión de ayer entre el consejero y las OPAs//ICAL

También se manifestó la meta de alcanzar un protocolo para la realización de controles de lobo cuando no han funcionado las medidas preventivas, o la de lograr la financiación necesaria para implantar las medidas preventivas en las explotaciones ganaderas.

Las OPAs expresaron su preocupación por el crecimiento de los ataques de lobo y solicitaron agilizar los pagos de las indemnizaciones ya previstas. Además, se interesaron por las medidas que podrían adoptarse para reducir la incidencia de enfermedades que afectan tanto al ganado como a la fauna silvestre, como la tuberculosis. El consejero comentó, en ese sentido, la posibilidad de aplicar el artículo 71 de la Ley regional 4/2021, que permitiría

reducir localmente las poblaciones.

Suárez-Quíñones presentó su programa de legislatura en la reunión, y también trató la «gran importancia» de la gestión forestal. Así, el consejero abordó con las OPAs la movilización y el aprovechamiento de los recursos forestales. Asimismo, destacó la consolidación y desarrollo del tejido industrial basado en la transformación de los productos forestales y el fomento de iniciativas empresariales ligadas al monte o los usos ligados al ocio y al turismo. Por su parte, las organizaciones agrarias manifestaron su preocupación por la utilización de tierras de cultivo, y en especial de regadío, para la implantación de instalaciones energéticas renovables.



# Castilla y León actualizará las indemnizaciones por ataques del lobo al ganado

**Suárez-Quñones presenta su programa de legislatura a las OPAS, con las que se compromete a mantener reuniones periódicas**

**R. G. VALLADOLID**

Las indemnizaciones de la Junta a los ganaderos por los daños sufridos por ataques de lobo cambiarán a lo largo de este año. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio actualizará los baremos para calcular estos ingresos, y que afectarán también a los perjuicios ocasionados por otras especies de fauna salvaje, tal y como anunció ayer el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quñones, a las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León.

Durante esta reunión, Suárez-Quñones expuso su programa de legislatura a los profesionales del sector agrícola y ganadero, al tiempo que explicó que también se podrá incluir en esta Orden la posibilidad de aplicar emergencias cinegéticas en comarcas concretas. Orden que, además, se debatirá en las reuniones específicas previstas entre las OPAS y Medio Ambiente y que llevarán a cabo de manera periódica.

Entre los objetivos de la Consejería está poner en marcha una serie de medidas para conseguir del Ministerio para la Transición Eco-

lógica la suspensión de la Orden de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), alcanzar un protocolo para la realización de controles de lobo cuando no han funcionado las medidas preventivas, y lograr la financiación necesaria para implantar las medidas preventivas en las explotaciones ganaderas.

Las organizaciones profesionales agrarias, por su parte, expresaron su preocupación por el crecimiento de los ataques y de los daños del lobo a los rebaños, y solicitaron agilizar los pagos de las indemnizaciones previstas. Además, se interesaron por las medidas que podrían adoptarse para reducir la incidencia de enfermedades que afectan tanto al ganado como a la fauna silvestre, como la tuberculosis. El consejero comentó, en ese sentido, la posibilidad de aplicar el artículo 71 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, sobre emergencias cinegéticas, que permitiría reducir localmente las poblaciones de las especies problemáticas.

Durante la reunión entre las

OPAS y el consejero de Medio Ambiente, en la que Suárez-Quñones presentó su programa de legislatura, también se trató la «gran importancia» como recurso público y privado de la gestión forestal en el medio rural de la Comunidad. Así, el consejero abordó con las organizaciones profesionales agrarias la movilización y el aprovechamiento de los recursos forestales endógenos de todo tipo por su capacidad para crear empleo y fijar población activa.

Asimismo, destacó la consolidación y desarrollo del tejido industrial basado en la transformación de los productos forestales y el fomento de iniciativas empresariales ligadas al monte que conlleva esta actividad, además de la conservación del ingente patrimonio natural y su biodiversidad en Castilla y León, informa Ical, valorizando los usos ligados al ocio y al turismo en torno al mismo, sobre todo en los espacios naturales protegidos.

Por su parte, las organizaciones agrarias manifestaron su preocupación por la utilización de tierras de cultivo, y en especial de regadío, para la implantación de instalaciones energéticas renovables.

## LA RAZÓN (30/05/2022)

### El PSOE se movilizará en los pueblos frente a PP y Vox

La Razón. VALLADOLID

Durante el encuentro de alcaldes y concejales que el PSOE de Valladolid ha celebrado este fin de semana, los socialistas han tratado de mostrar que son un partido sólido y que están preparados para dar la batalla ante el avance de PP y Vox en Castilla y León.

Las encuestas no son buenas en vísperas de las elecciones de Andalucía, pero el PSOE quiere aprovechar su gran presencia en los pueblos para dar la batalla pensando ya en las municipales de dentro de un año. Así, los socialistas se van a movilizar de la mano de sus alcaldes y concejales en el medio rural para que expliquen a sus vecinos el «impacto negativo» que tendría la llegada del pacto de Partido Popular y Vox a los ayuntamientos.

**PASCUAL**


Las tres generaciones (David Álvarez, Eutiquio Álvarez y Carmelo Álvarez) de la Ganadería Tezanillos.

**EL 100% DE LA LECHE QUE COMPRA PASCUAL ES DE ORIGEN ESPAÑOL**

## «Hay que apostar por la juventud para que la ganadería tenga futuro porque hay mercado para trabajar»

**Pascual lanza un programa de becas y un plan educativo de alto rendimiento para hijos de ganaderos**

**VALLADOLID**

**Andrea Díez.** El relevo generacional es uno de los principales retos a los que se enfrentan los sectores de la ganadería y la agricultura en las zonas rurales donde el fenómeno de la despoblación está haciendo mella. Por este motivo, Pascual, compañía líder en el sector agroalimentario, ha puesto en marcha una novedosa iniciativa para animar a los hijos de ganaderos a continuar con las explotaciones familiares: «Han sido becados todos los hijos de nuestros ganaderos que actualmente están estudiando una carrera que les va a permitir seguir con el negocio familiar. Nuestra intención es dotar de continuidad y recorrido a este programa, de manera que se repita en cada curso académico, ampliándolo en próximas ediciones a jóvenes agricul-

tores locales», explica el director de Compras Agro de Pascual, Joaquín Lorenzo.

En esta primera edición se han beneficiado de este proyecto doce alumnos a nivel nacional, cuatro de ellos en Castilla y León. «Es un reflejo de la situación actual. Es triste que haya ganaderías en buenas condiciones pero que se vean avocadas al cierre por falta de un relevo».

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el porcentaje de titulares de una explotación agrícola o ganadera con menos de 40 años es de tan solo el 8,6% y en este sentido Lorenzo tiene claro que «hay futuro, pero no para el 50% de los ganaderos que ahora rondan los 60 años, sin descendencia que se quieran hacer cargo del negocio y esas granjas, aunque funcionen no van a continuar. Es un problema grave».

### Programa especial

Las becas económicas para los hijos de ganaderos que trabajan con Pascual se verán reforzadas con un programa de alto rendi-



Joaquín Lorenzo, director de Compras Agro de Pascual.

miento que según explica el director de Compras Agro de Pascual les permitirá que «dentro de veinte años sigan trabajando en las explotaciones y sean los mejores». Esta formación incluye áreas como sostenibilidad, medioambiente, reproducción, seguridad alimentaria o gestión empresarial.

Satisfechos con el resultado de este primer lanzamiento fruto de la activa comunicación con sus ganaderos, el 85% de sus granjas llevan más de 15 años colaborando con la compañía,

que confía en contribuir a la permanencia de un sector ganadero competitivo en el país.

El 100% de la leche que compra Pascual es de origen español, habitualmente procede de municipios de menos de 40.000 habitantes, potenciando la actividad en las economías rurales y el impacto socioeconómico positivo de toda su cadena de valor láctea. En cuanto a la responsabilidad mediambiental, Joaquín Lorenzo no ha querido pasar por alto la importancia de la responsabilidad con el entorno

natural. «El fenómeno de la despoblación no solo es un desastre para la economía y para el equilibrio entre el medio rural y urbano, sino que además supone un grave problema medioambiental. Un sector primario débil supone una dependencia de las importaciones y por lo tanto se produce una mayor huella de carbono de la cadena de suministro». El abandono de ecosistemas rurales y cultivos supone la degradación paulatina de los campos, terrenos y bosques con la consecuente merma de absorción de CO<sub>2</sub>.

### Eficiencia productiva

La rentabilidad de las explotaciones y la incorporación de las nuevas tecnologías a las granjas son un aspecto importante en el marco de la competitividad empresarial porque «en España producimos siete millones y consumimos nueve millones y un ganadero puede producir la leche que sea capaz de comercializar por lo tanto en un país en el que faltan dos millones de toneladas de leche, el futuro ganadero es bueno».

Y es en este punto donde entran en juego la calidad del producto y su rentabilidad. Por eso, además del novedoso programa de becas, Pascual tiene en marcha programas de eficiencia productiva para mejorar los resultados de las granjas con las que trabaja, permitiendo el desarrollo de las explotaciones y la mejora de su rentabilidad. Si una ganadería media en España produce unas 800 toneladas al año, una de Pascual, 1.496, un 87% más. Y para reforzar la competitividad del sector ha creado Optilácteo, un proyecto innovador que permite conocer con exactitud, a través de herramientas TIC, las debilidades y fortalezas de cada granja, lo que ayuda a nuestros ganaderos a maximizar sus recursos.

Como señala Joaquín Lorenzo, «el futuro del campo pasa por una digitalización que permita a nuestros ganaderos rentabilizar sus explotaciones gracias a información precisa en tiempo real». Los programas de gestión del campo han facilitado el aprendizaje de los ganaderos para trabajar eficientemente de forma que el coste de producción y su granja «sea respetuoso con el medio y rentable y por lo tanto tenga una salida apetecible para los jóvenes. La profesionalidad del sector primaria hay que apoyarla y divulgarla. Esto es un efecto de llama continua».





## Europol y la Comisión ya persiguen el fraude con los fondos europeos

La 'operación Centinela' busca evitar la corrupción en torno al programa Next Generation

**ALEJANDRA OLCESE** MADRID  
Casi dos años después de que el 21 de junio de 2020 el Consejo Europeo aprobara la creación del programa Next Generation, la Comisión Europea y la Europol ya están rastreando casos de fraude en la ejecución de esos fondos millonarios, cuyo despliegue se está llevando a cabo de forma acelerada. Los fondos «ya han sido blanco de los estafadores que buscan acceder ilegalmente a estos miles de millones de euros de recursos.

Aunque se han establecido salvaguardias para evitar abusos a nivel nacional y europeo, las autoridades han tenido que distribuir estas ayudas tan rápidamente que esto ha debilitado algunos de los procedimientos de *due diligence* y ya ha permitido que algunos delincuentes se beneficien ilegalmente de estos fondos», advierte la Europol en su último informe sobre corrupción económica en la Unión.

Esta agencia para la cooperación policial lanzó en octubre de 2021 la

*operación Centinela* –sentinel, en inglés; *sentinelle*, en francés– para rastrear el fraude en los fondos europeos, junto a la Fiscalía Europea, a Eurojust –agencia para la cooperación judicial penal– y la OLAF, la oficina de la UE dedicada a investigar el fraude, la corrupción y las faltas graves en las instituciones y países europeos.

Esta última oficina se dedica a investigar presuntos casos de fraude a raíz de pistas o indicios que recibe del exterior –entre sus filas cuenta

con ex miembros de la policía de distintos países o incluso antiguos agentes de centros nacionales de inteligencia–, aunque también puede investigar casos concretos a iniciativa propia, explican a EL MUNDO fuentes conocedoras de su procedimiento desde Bruselas.

«La prevención de la delincuencia transfronteriza grave es el núcleo del mandato de Europol, y estamos plenamente comprometidos a apoyar a los Estados miembros en la lucha contra cualquier inten-

to de la delincuencia organizada de infiltrarse en la economía legal de la UE y en el fondo NextGenerationEU. Nuestro mensaje es claro: cualquier amenaza al NextGenerationEU es una amenaza directa al bienestar financiero de la Unión Europea y de sus ciudadanos. La *Operación Centinela* reforzará nuestra respuesta conjunta al fraude y protegerá la reconstrucción de nuestras comunidades», expuso en su lanzamiento Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol.

Esta organización sabe que los 672.500 millones de euros de préstamos y ayudas con los que se está regando a las economías de la Unión, para reconstruirlas y transformarlas tras el covid, atrae a grupos delictivos activos en la Unión Europea y fuera de ella que buscarán la evasión de impuestos, el fraude de impuestos especiales, la corrupción, la malversación, la apropiación indebida y el lavado de dinero.

Estas redes ya han estado operativas durante la pandemia y la Europol y la OLAF han interceptado a algunas de ellas. Un ejemplo podría ser el grupo delictivo arresta-

**«Los estafadores»  
quieren acceder  
ilegalmente a miles  
de millones de euros»**

do en Francia por parte de la Gendarmería Francesa y la policía israelí por estafar 12 millones de euros al estado francés mediante 3.600 empresas ficticias que canalizaban fondos de desempleo. Una vez percibidas las prestaciones, los fondos se transferían al extranjero y se cambiaban a criptomonedas.

«Por lo que parece, la magnitud de las ayudas ha llamado la atención de las organizaciones criminales [incluyendo la mafia italiana] y la Europol ha decidido abrir una línea de investigación nueva. De hecho, la organización intervino en junio pasado en el desmantelamiento en Francia de un red criminal para apropiarse de fondos europeos dirigidos al desempleo», apunta la Oficina de Fondos Europeos de PwC.

Quizá no fue casual que la primera reunión del proyecto *Centinela* se celebró en Roma en septiembre de 2021, para que las instituciones judiciales y policiales asistentes se coordinaran ante posibles amenazas a los fondos de recuperación. Una segunda reunión se ha celebrado en abril de este año, en La Haya.

La Europol espera que «algunos delincuentes se especialicen en abusar de estos planes orquestando complejas redes de empresas con el fin de defraudar fondos públicos». Y avisa de que se podrían perder «miles de millones de euros de ingresos públicos a través de IVA y otros fraudes», lo que perjudicará los intereses de los contribuyentes y, al final, en la capacidad de los gobiernos para financiar servicios públicos esenciales.





JESUS G. FERIA

H. Montero. MADRID

Jordi Sevilla Economista

## «Hay que sacar las amargas con las dulces y subir la edad legal de jubilación»

«Se debe deflactar la inflación en la Renta. Sí, sí, lo que propone Ayuso»

**V**alenciano, con carrera en Madrid, impreso el nombre del santopatrón de Cataluña (y de Alcoy, apunta) y andaluz por apellido, Jordi Sevilla, ex ministro, hombre-goma de dos presidentes socialistas (Zapatero y Sánchez) por aquello de que va a su aire, y ex presidente de Red Eléctrica, ha tomado varias veces la puerta giratoria sin marearse. Nos recibe en su «casa» de la consultora LLYC, un hervidero donde destripar «La España herida» (Deusto). ¿Qué tiene de valenciano, andaluz, catalán o madrileño? «Lo que todos. Somos españoles. Una pluralidad de sentimientos. Pero somos la única generación que no ha sufrido una guerra interna. Tenemos una tradición de virulencia tan fuerte que me parece increíble que haya quien azuza el fuego». Primera andanada. -¿Suenan triunfalista Sánchez? -Hay datos que avalan lo que dice. El primer trimestre crecimos el 0,3%, y la media de la OCDE fue el 0,1%. Francia no ha crecido y Japón, Italia y EE UU decrecen. -La caída aquí fue más severa... -Porque teníamos los sectores más afectados. Hacemos un flaco favor a España si nos autoflagelamos en exceso. Hemos perdido convergencia con la UE, aunque

estamos mejor que en 2000. Pero gobierne quien gobierne, España lleva décadas con factores diferenciales como la media de paro más alta que la europea, una inflación superior. Hay algo estructural, mucha pequeña y mediana empresa que sobrevive precarizando el empleo y sin innovación. No tenemos que sentirnos orgullosos del bar de la esquina chapucero que paga en negro sino del bar del que hace las cosas bien. Por cierto, ¿hacer crecer a nuestras empresas es de izquierdas o de derechas?



**Hay que abrir el debate nuclear. Cerrar las actuales no implica rechazar la mini-nuclear»**

-Sin embargo, dice que hoy tener empleo no te saca de pobre. -La pobreza se ha enquistado. A lo mejor las políticas no sirven y el Ingreso Mínimo Vital, que no es de nadie, no funciona bien. -La pobreza se enquista y la presión fiscal crece. ¿Por eso está la clase media en riesgo? -No tengo tan claro que haya subido la presión fiscal. Nuestro sistema recauda por unidad de PIB menos que la media de la UE. Debíamos corregir esos agujeros o ese fraude antes de abordar si subimos o bajamos impuestos. Otra cosa es la inflación y la deflatación de la tarifa, que debería deflactarse por ley siempre que el IPC superase el 2%, que es el objetivo del IPC y evitar una subida silenciosa de impuestos. -¿Lo que propone Ayuso? -Sí, sí. Para evitar subidas impositivas y que se convierta en una herramienta electoral. Y el que quiera subir o bajar impuestos que asuma las consecuencias. -Si el Estado no es eficiente o se adelgaza o se bajan tasas... -Lo segundo. Con la crisis financiera y la pandemia, hay que tener muchos bemoles para seguir diciendo que el Estado es un lujo o un problema. Una sociedad sin Estado sería peor. -No conozco ningún paraíso fiscal donde se viva mal. -Habrá que ver cómo han llevado la pandemia y la crisis. Sin Estado,

aquí, durante la crisis financiera, si hubiera dejado quebrar a los bancos, habrían arrastrado a los depositantes. Lo que hace falta es que el Estado sea ágil y eficaz. -Pues tenemos encima como una espada de Damocles una subida de impuestos en 2023. -Porque tenemos un debate político de baja altura. -Tenemos más funcionarios que nunca. ¿Hacen falta más? -No tenemos más que la media europea. Hay que empezar por reducir la temporalidad, que es una vergüenza que el primer agente económico del país tenga esa tasa de precariedad. -Propone compaginar esos empleos precarios con el cobro de prestaciones. ¿Subvencionamos el empleo poco cualificado? -El problema es que hemos roto el pacto. Muchos jóvenes han cumplido: han estudiado, se han ido fuera, hablan idiomas y tienen que aceptar, como los investigadores, ser becarios toda la vida. -En España todo el que quiere prosperar, puede hacerlo. -Sí, pero qué casualidad que la mayoría de empresarios sean hijos de empresarios. -¿Es un verso libre del PSOE? -Sí, creo mucho en la libertad individual. Soy liberal a fuerza de socialista y el pequeño de una familia numerosa muy discutiadora. Para mí discutir no es peyorativo. Pero ahora estamos en el «idiotia y tú más». Descalificar no hace país. Aquí no sobra nadie. -¿No va quedar otra que elevar la edad legal de jubilación? -Creo que sí. Y hacer coincidir el cálculo de la pensión con todo el periodo de cotización. El Gobierno solo ha aplicado la mitad de lo que estaba en el Pacto de Toledo, la indexación al IPC. Lo razonable habría sido hacerlo todo. Es mejor sacar las amargas con las dulces porque ahora a ver quién pacta las amargas. Ha habido precipitación del Gobierno. -¿Hay que encarecer el despido como piden los sindicatos? -No. Derogar toda la reforma laboral del PP es un disparate. No es el momento de penalizar más el despido. Eso es del siglo XX. -¿Se queda cojo el tope al gas? -Se debería de haber negociado antes. Pero seguimos sin abordar la incompatibilidad entre el mercado marginalista y que más de la mitad de nuestro sistema se genere con renovables a coste cero. -¿Se habla con Teresa Ribera? -No contesta. -¿Nuclear, sí o no? -Es un debate que habrá que abrir. Una cosa es cerrar las centrales actuales y otra cerrarnos las puertas a las mini-centrales.





Embalse de La Vega del Jabalón, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), el pasado 10 de febrero. / PATRICIA GALIANA (EP)

Castilla-La Mancha suspende el canon medioambiental, dos meses después de aprobarlo, por la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la energía

## El impuesto de quita y pon al agua

**PATRICIA SEGURA, Madrid**  
Hay impuestos que duran apenas un suspiro. El pasado 17 de febrero, el Gobierno socialista en Castilla-La Mancha aprobó la nueva Ley de Aguas entre las quejas de la oposición (PP y Ciudadanos): la norma incluía un tributo al consumo del agua. Apenas 64 días después todo cambió y el Ejecutivo de Emiliano García-Page suspendió la decisión y el impuesto de quita y pon, con una base de dos euros al mes, no llegó a materializarse en los bolsillos de los castellano-manchegos.

¿Qué llevó a suprimirlo cuando acababa de ser aprobado? El miedo a que la suma de ese gravamen a los efectos en la economía de la guerra de Ucrania, y a los precios de la energía, fuera demasiado para los consumidores regionales, acostumbrados a que el agua cope los titulares: Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia acaban de enzarzarse de nuevo por el caudal del trasvase Tajo-Segura.

"Muy pronto nos vamos a tener que comprar agua embotellada de marca para ducharnos, porque nos va a salir más barato", afirmaba Elena Jaime Jareño, de Ciudadanos, durante el debate parlamentario de febrero, cuando su partido y el PP se oponían al impuesto, sin saber que unas semanas después, en abril, también votarían en contra de su supresión: "¿No se dan cuenta de la barbaridad que supone esto?". "Cuando les llegue la factura a los ciudadanos, no les va a dar la risa", criticaba, también en febrero, la conservadora Ana Guarinos.



Manifestación por la reducción del trasvase Tajo-Segura, el pasado 17 de mayo en Alicante. / JOAQUÍN DE HARO

"Si no cumplimos con la política medioambiental, con la Unión Europea, no llegarán los fondos que necesitamos para hacer inversiones, y llegarán sanciones", cerraba, a modo de justificación, el consejero castellano-manchego de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo (PSOE), que en ese momento del debate de febrero desconocía que el Gobierno regional acabaría suprimiendo el tributo en abril.

Esta es la rocambolesca historia de un impuesto muerto nada más nacer, y que al mismo tiempo puede revivir en cual-

quier momento. "El canon se ha suspendido de manera indefinida antes de cobrarlo. Ningún ciudadano ha pagado nada", asegura un portavoz de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. "Su entrada en vigor estaba prevista para después de que la Ley de Aguas llevara unos meses vigente. Ahora se suspende para que el ciudadano no sufra un incremento en el gasto, dada la coyuntura económica", añade. "Otras comunidades autónomas lo tienen desde hace 10 o más años", remata, en referencia a Galicia, Cataluña, Bala-

"Otras autonomías lo tienen desde hace 10 o más años", dice el Ejecutivo regional

La modificación se produce en medio de la polémica por el trasvase Tajo-Segura

res, Andalucía, Extremadura, Navarra, La Rioja, Murcia, Cantabria y Asturias.

El nuevo gravamen iba a afectar a actos vitales y cotidianos como beber, ducharse, cocinar, lavar la ropa o poner el lavavajillas. Cuando el Ejecutivo autonómico retomó la idea, el reflejo en la factura del uso doméstico del agua se dividiría en dos partes: una cuota fija de dos euros al mes por vivienda, y una cuota variable que dependería del número de personas que vivan en cada casa, y de la cantidad de agua que consuman.

**Hasta 500 euros al mes**

En el caso de usos no domésticos, como los agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, la parte fija se determinaría en función del diámetro de la boca de paso del agua del contador. En el caso de los más pequeños, aquellos que midan menos de 15 milímetros, sería de cuatro euros al mes. Y en el caso de los más grandes, de más de 125 milímetros, la cuota se incrementaría hasta los 500. A lo que se sumaría la parte variable: 50 céntimos por metro cúbico de agua consumida.

"Es un canon medioambiental para sufragar los gastos de depuración y de abastecimiento de las poblaciones", resume Fernando Mora, presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. "Pero lo posponemos hasta que la situación económica lo permita, y antes de que las familias se puedan ver perjudicadas".

Lo que sí sigue en vigor es el resto de la actualización de la Ley de Aguas, una norma que no se había renovado desde hacía dos décadas. El texto incluye "el reconocimiento del derecho de la comunidad autónoma a ser oída en relación con los procedimientos que afecten a los intereses de Castilla-La Mancha". Una disposición significativa si se tiene en cuenta que es la cuenca cedente de una de las infraestructuras hidráulicas más grandes de España: el trasvase Tajo-Segura.

Desde los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) se deriva el agua del río Tajo hasta la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La pugna por el control del agua entre estas comunidades ha vuelto a salir a flote tras la concentración de los agricultores de Levante el pasado 17 de mayo en contra de los planes del Gobierno central de reducir el volumen mensual de agua trasvasada, que pasará de 38 hectómetros cúbicos a 27.

El objetivo de esta medida es encontrar el equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo, en Castilla-La Mancha, y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica. "Hay que adaptarse a la realidad ineludible del cambio climático y de una menor disponibilidad de agua", se afirma en el Ejecutivo central. De nuevo, el agua marca el ritmo de la política castellano-manchega.



Varias iniciativas llevan el coche compartido eléctrico a las zonas rurales y ofrecen alternativas innovadoras de movilidad

## “En este vehículo cabemos todos los del pueblo”

M. ÁNGEL MEDINA. Illán de Vacas es un minúsculo pueblo de Toledo de calles sin asfaltar con una plaza sin nombre por la que se desparraman árboles, presidida por una iglesia de ladrillo que solo tiene una campana. La otra la robaron una noche. “Éramos cuatro vecinos censados, pero uno se ha tenido que ir a Chile, así que ahora somos tres”, dice el alcalde, Javier Bollain. En la plaza, entre el templo y el tractor, también se ve una imagen efímera: un coche eléctrico recién estrenado —que pueden usar todos los vecinos, también los ocasionales— enchufado a un cargador. Hasta ahora, el *carsharing* (vehículos compartidos) tan solo funcionaba en las grandes ciudades, pero varias iniciativas lo han llevado ya a zonas rurales, ofreciendo alternativas innovadoras de movilidad frente a la despoblación de la España vacía.

“Estamos considerando el pueblo más pequeño de España”, explica el regidor. El INE no miente: tres habitantes censados en 2021. Puede haber pedanías más deshabitadas, pero aquí hay Ayuntamiento, aunque el edificio lo tiraron hace años, al igual que la escuela y la cárcel. En este ejemplo de la España vacía, Hyundai ha instalado uno de los coches punteros de su programa Vive, con el que pretenden llevar este transporte compartido a pequeñas localidades olvidadas. “La iniciativa está pensada para pueblos de 300 o 400 habitantes sin transporte público, médico, farmacia ni servicios. Queremos ayudar a cambiar la movilidad en estas zonas, que son las más aisladas, para luchar contra la despoblación”, señala Juanjo Martínez, portavoz de la compañía.

Cualquier municipio puede instalar uno de estos coches, eléctricos puros y con una autonomía de hasta 460 kilómetros. El Ayuntamiento se tiene que comprometer a tenerlo durante un año. Los primeros tres meses son gratis y luego el Consistorio debe pagar un alquiler mensual (de entre 600 y 900 euros) y decidir cuánto pagan los residentes que lo usen, que puede ir desde la gratuidad a los tres o cuatro euros por hora. Por ahora, están en 33 municipios (esperan llegar al centenar en un año) y tienen 5.600 socios.

Bollain explica cómo se mueven en Illán de Vacas. “Aquí hace falta coche para todo, porque no hay ningún servicio. Hay que ir a los pueblos cercanos a comprar, al médico, al banco o si te apetece tomar una cerveza”. Todos los vecinos tienen vehículo propio, pero además comparten el de Vive. “Lo usamos todos los días, porque al ser eléctrico es más barato. Y lo compartimos, nos acompañamos unos a otros para ir a los cercanos Cebolla o Los Cerralbos. Es un vehículo ideal. De hecho, en este coche cabe el pueblo entero”.

No es la única iniciativa para llevar este tipo de vehículos a la



Javier Bollain, alcalde de Illán de Vacas (Toledo), el viernes junto al coche compartido Vive de Hyundai / KIKE PARA



Vicent Garcia, el viernes junto a uno de los vehículos de Alterna en Albalat dels Sorells (Valencia). / KIKE TABERNER

España olvidada. Comienzan a germinar cooperativas de movilidad que suman a la sostenibilidad un fin de transformación social. Una de ellas es Alterna, que ha instalado vehículos en varios pueblos valencianos, entre ellos Albalat dels Sorells (unos 4.000 habitantes). “No nos gusta el *carsharing* en el centro de las grandes ciudades porque quita viajes al transporte público. Nosotros queremos que nuestros socios se muevan a pie, en bici, en metros o autobuses, y que solo usen el coche cuando necesitan hacer un viaje largo”, señala Vicent Garcia i Martí, presidente de Alterna.

El municipio en el que surgieron está bien conectado con Valencia —tiene estación de me-

tro—, por lo que la idea es que sus vehículos no se empleen para llegar a la capital, sino para enlazar pueblos cercanos con peor comunicación o para realizar viajes de fin de semana. Otra diferencia con los servicios presentes en las grandes urbes es que los vehículos no se pueden quedar en la calle. “No queremos ocupar espacio público, sino que las calles sean para los peatones. Nuestros coches se tienen que recoger y dejar siempre en el mismo aparcamiento”, dice Garcia. Por ahora, tienen seis vehículos (en Albalat, Paipor y Valencia) y 450 socios.

El portavoz de la entidad social señala que los socios suelen jubilar sus automóviles en cuanto usan el servicio: “Por cada coche

Seis autonomías ya tienen cooperativa y en Canarias se está desarrollando

“Es el futuro, y para mí ya el presente”, afirma un usuario de este transporte

que ponemos en funcionamiento quitamos 10 o 15 de la calle. De hecho, yo mismo me deshice del mío hace tres años, cuando entré en la cooperativa, y no voy a comprar otro nunca más. Esto es el futuro, pero para mí ya es el presente. No necesito un coche propio”. Y continúa: “Me ahorro una media de 500 euros al mes entre seguros, reparaciones, combustible y gastos”.

En España hay ya al menos siete cooperativas similares en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Navarra, Aragón y Canarias (esta última en proceso). Todas ellas se han asociado en The Mobility Factory, que aglutina a 15 entidades españolas y europeas similares en una cooperativa de segundo grado que les facilita una aplicación común para usar el servicio desde el móvil.

La primera en España —en 2016— y la que más socios tiene es la catalana Som Mobilitat, que roza los 3.000 abonados en unas 30 localidades. “Nuestro modelo arrancó en Mataró [Barcelona] con el objetivo de replicar el modelo de Som Energia, una cooperativa que busca transformar el modelo eléctrico y hacerlo más democrático y sostenible. Queremos lograr lo mismo en cuanto a movilidad”, apunta Ricard Jorner, fundador de Som Mobilitat.

Cuentan ya con 62 vehículos que compran con aportaciones de los socios (que luego reciben una rentabilidad del 3%) y reparten en municipios grandes y pequeños. La colaboración con las entidades locales es fundamental. “Un buen ejemplo es Castellbisbal [Barcelona], unos 12.000 habitantes, donde tenemos dos coches en colaboración con el Ayuntamiento. El personal municipal utiliza los coches de lunes a viernes en horario laboral y a la vez ofrece ese servicio para los vecinos las tardes y los fines de semana”, dice Jorner.

Y considera que su servicio es diferente: “El *carsharing* tradicional es un negocio en manos de fondos de inversión que se van en cuanto se pierden los números, como ha pasado en Valencia. Nuestro servicio es mucho más resiliente y colaborativo, porque queremos mejorar la calidad de vida de las personas, las que usan el servicio y las que no, y que haya menos coches en las ciudades. No nos vamos a ir”.

En Illán de Vacas, Bollain mira orgulloso su coche negro eléctrico. “Cada vez que vamos a otro municipio la gente lo mira, les llama la atención y me preguntan por él, seguro que se va a instalar en más sitios”, comenta. Y saca el orgullo también para hablar de su terruño: “En los pueblos se vive muy bien, aquí pasamos el confinamiento sin apuro. Cada vez va a haber más interés de la gente por irse al campo, las grandes ciudades son una pesadilla”. Y los coches eléctricos llegan también a los caminos de tierra.